

LA ECONOMÍA DEL MIEDO

JOAQUÍN ESTEFANÍA

Los desafiados y la rebelión de las élites

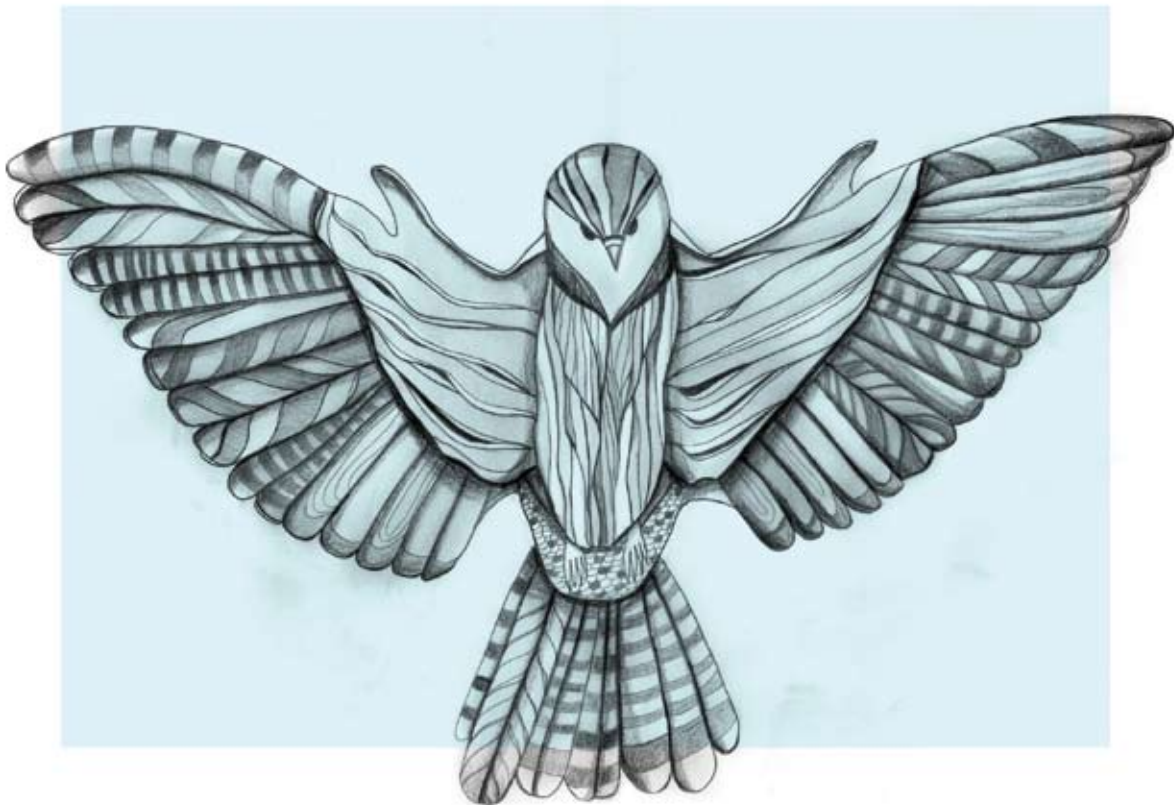
Los cuatro años largos que el mundo lleva padeciendo la Gran Recesión se han caracterizado hasta hace poco por una doble reacción: el silencio de las víctimas, paralizadas –con escasas excepciones– por el miedo, el paro, el empobrecimiento, la exclusión..., y la rebelión de las élites, que se enriquecen más allá de toda lógica, exhiben sin vergüenza sus diferencias, se liberan de la suerte de las mayorías y rompen el contrato social que las une como ciudadanos. Con mucho retraso, la resignación ha comenzado a romperse y las élites a ocultarse (en medio de la crisis griega, las grandes fortunas hicieron suyo el lema de “no provocar, no exhibirse y seguir trabajando”, según la corresponsal del diario *Abc*).

Desde el verano de 2007 una cascada de dificultades económicas ha asolado, sin solución de continuidad, a la ciudadanía del planeta. No todas son de la misma naturaleza, aunque el conjunto de las mismas se ha aglutinado bajo el concepto de Gran Recesión. Crisis hipotecaria, crisis de las materias primas y del petróleo, crisis financiera de liquidez, en primera instancia, y luego de solvencia, crisis de endeudamiento privado y, en una segunda fase, crisis de la deuda soberana, y siempre crisis de la economía real, la que perjudica al ciudadano común que no entiende de macroeconomía. Mientras dura la Gran Recesión todas esas crisis se superponen y una de ellas adquiere la faz dominante en cada etapa, aunque las demás continúan merodeando, con carácter subsidiario, sin haberse

arreglado definitivamente ninguna de ellas. De ahí la gravedad de lo que ha acontecido.

Con razón se habla de la Gran Recesión como la crisis más profunda y prolongada del capitalismo en las últimas ocho décadas de la historia del mundo. Sus secuelas determinarán cambios, algunos de los cuales están todavía en la penumbra, irán más allá de las transformaciones económicas y afectarán al conjunto de la sociedad que surja en el futuro inmediato. El capitalismo ha padecido una enfermedad muy grave pero por el momento no ha salido debilitado definitivamente de la misma; su principal componente, el capitalismo financiero, es el que más medicación ha recibido ante su metástasis, y quizá por ello ha seguido funcionando y generando beneficios, con más o menos muletas. En todo el análisis hay que poner como caución el adverbio de duda “quizá” porque nada es definitivo aún y persiste todo tipo de volatilidades e incógnitas. El economista Hyman Minsky escribió hace bastante que el capitalismo es un sistema defectuoso cuyo desarrollo, si no su límite, llevará a profundas depresiones y a la perpetuación de la pobreza. En 1983, Minsky, famoso por la hipótesis de la inestabilidad natural del sistema financiero, planteó una pregunta crítica: “¿Puede ESO [una Gran Depresión] volver a ocurrir?”. Le contestó nada menos que Ben Bernanke, gobernador de la Reserva Federal de EEUU (Fed), que en 2002 dio una conferencia con un título tan significativo como “Deflación: asegúrese de que ESO no ocurra aquí”. En ella sostuvo que existían medios más

que suficientes para que ESO no llegase a ocurrir entonces, a principios del nuevo milenio, a pesar de la creciente inestabilidad financiera. A la Gran Recesión le quedaba un lustro para llegar y EEUU salía de una recesión económica que coincidió con la depresión política motivada por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York y Washington. “El Gobierno de EEUU –explicó Bernanke– tiene una tecnología llamada imprenta (o su equivalente electrónico en la actualidad) que le permite producir tantos dólares como desee a coste cero. Al incrementar el total de dólares en circulación, e incluso al amenazar de forma creíble con hacerlo, el Gobierno de EEUU también puede reducir el valor de un dólar en términos de bienes y servicios, lo que equivale a aumentar el precio en dólares de esos bienes y servicios. Concluimos que, bajo un sistema de papel moneda, un gobierno determinado puede generar un mayor gasto y por tanto una inflación positiva. Por supuesto, el Gobierno de EEUU no va a imprimir dinero y distribuirlo de cualquier manera. Normalmente, el dinero se inyecta en la economía mediante la compra de activos por parte de la Fed. Para estimular el gasto agregado cuando los tipos de interés llegan a cero, la Fed debe aumentar el nivel de compras de activos o, posiblemente, ampliar la variedad de activos que compra. De forma alternativa, la Fed podría encontrar otras maneras de inyectar dinero en el sistema, por ejemplo otorgando préstamos a un bajo interés a los bancos o cooperando con las autoridades fiscales.”



La conferencia de Bernanke es de 2002. Muy premonitoria de la política de “expansión cuantitativa” (*quantitative easing*) que puso en marcha en medio de la Gran Recesión, cuando la Fed no dudó en recurrir a la máquina de imprimir dinero para reanimar a la economía americana –y de paso, a la mundial–, destinando más de un billón de dólares a la compra de bonos del Tesoro y de títulos hipotecarios. En realidad, esa fue la segunda fase, más agresiva, de la estrategia de expansión cuantitativa de Bernanke. Los economistas John Bellamy Foster y Fred Magdoff, vinculados a la *Monthly Review*, la mítica publicación de izquierdas estadounidense, dicen que durante la misma conferencia, el presidente de la Fed sugirió también que un recorte de impuestos financiado con dinero a fin de evitar la deflación era “básicamente equivalente” al famoso lanzamiento de dinero con un helicóptero de Milton Friedman. Una postura con la que

Bernanke se ganó el sobrenombre de “Helicóptero Ben”, que le ha acompañado hasta hoy.

Así pues, “quizá” el capitalismo financiero haya sobrevivido por el momento a sus dificultades más peyorativas. Lo que caracterizó a la política económica mundial en la primera fase de la Gran Recesión, antes de que el principal problema *instrumental* fuera el gigantesco volumen de la deuda y el déficit público (ha sido la crisis la que ha causado el déficit, no el déficit el que ha determinado la crisis), fue una intervención masiva de los gobiernos en el sector financiero, lo que permitió la recuperación de los beneficios de los bancos, mientras que el elevado paro que se generó (el principal problema *final*) solo disminuirá en el mejor de los casos mucho tiempo después de que la economía mundial recupere la velocidad de crucero.

Sin embargo, la dureza de las dificultades está cambiando la estructura de las sociedades, muchos de cuyos

actores se han depauperado o arruinado mientras el sistema financiero continúa ejerciendo su supremacía. Ha emergido explícitamente la amenaza que supone una economía incontrolada para la capacidad de supervivencia ciudadana. Al analizar las consecuencias de la Gran Recesión, el sociólogo francés Alain Touraine escribe que la crisis ha obstaculizado la formación de una nueva sociedad, de nuevos actores económicos y de nuevas relaciones entre ellos; la crisis no puede definirse solo como una avería del capitalismo sino que ha destruido a la sociedad allí donde ha estallado: “Una crisis económica o financiera como la de 1929 o la que estamos viviendo entierra a los actores, sus conflictos y toma las formas de mediación y arbitraje. Quienes dirigen el sistema financiero en su propio interés, que se opone tanto al de las empresas, sobre todo al de las pequeñas y medianas empresas, como a los intereses de los asalariados, adoptan una posición de ruptura con la sociedad y sus instituciones”.

Con estas características tan desiguales de supervivencia, hay unanimidad en la afirmación de que el mito del eterno retorno está excluido: sea cual sea la salida a las dificultades, duren estas tanto como duren, se pегeñe una cartografía social u otra, las cosas nunca volverán a ser como antes. Como tampoco lo fueron después de la Gran Depresión. Cuatro años después del estallido de las primeras dificultades recesivas apenas hay quien crea que “las reformas estructurales pendientes” (el lenguaje de cartón de la época) van a ser capaces de restablecer la coyuntura anterior sino que una transformación prolongada de la vida económica se presenta como inevitable. No solo dependerá de la teoría económica dominante, sino de las secuelas prácticas que van a quedar. Retornar a la antigua “normalidad” se presenta como una ensoñación, aunque solo sea porque en la primera mitad del siglo XXI, como efecto primario de la globalización, hay que gobernar para *todos* los habitantes del planeta y no solo para los del Primer Mundo, como ha sucedido durante la anterior centuria. El Norte geopolítico, que sigue conservando el monopolio de la investigación y el desarrollo y el oligopolio de la formación de capital, ha perdido sin embargo el dominio del comercio mundial, mucho más democratizado. Se vive la transición entre un Norte y un Occidente hegemónicos durante siglos hacia un Sur y un Oriente en rapidísimo desarrollo; de los países más ricos, aunque muy endeudados, hacia los emergentes que producen y ahorran lo que los primeros deben; de las economías industriales dominantes en los mercados mundiales, que imponían los precios de las materias primas y de las manufacturas, hacia economías en desarrollo que reciben las inversiones que antes se concentraban en las más pujantes; de un sistema basado en la industria hacia otro centrado en el conocimiento. La ensoñación de la normalidad perdida no se repetirá a pesar de los intentos retóricos de tantas figuras públicas por instalarla en la agenda pública.

No se hace la pedagogía política suficiente para explicárselo a los ciudadanos, presos de ansiedad, que quieren recuperar sus posiciones de antes de la crisis y se interrogan porque no podemos acomodarnos en la última etapa de crecimiento de la economía mundial, que correspondió con un ciclo largo que duró casi 14 años, durante los cuales aquella experimentó uno de los periodos más dinámicos de su historia. Y sin embargo, eso no se repetirá porque los cimientos en los que se sustentaba estaban corroídos por la cantidad de burbujas que había en su interior y que estallaron una detrás de otra en forma de desequilibrios cuando se inició la Gran Recesión, empezando por la más abrumadora e impopular de todas ellas, la explosión inmobiliaria y el endeudamiento de las comunidades públicas, de bancos y empresas privadas, y de las familias. Deuda pública y, sobre todo, deuda privada.

Cuando la gente percibe la caída económica y visualiza con dolor sus consecuencias, los principales conflictos surgen por la distribución de lo poco que hay. Por el reparto de la escasez. En periodos de auge, la multiplicación de las diferencias parece más asumible, aunque tampoco lo es: unos mejoran mucho, demasiado, pero los más recogen al menos las migajas del bienestar. Ese es el contrato implícito existente. Se soporta el malestar. Este se incrementa exponencialmente cuando los de abajo ven que se reduce el *mínimo minimorum* con el que han de sobrevivir. El escándalo emerge cuando al tiempo que se hacen públicos los extraordinarios bonos de los ejecutivos de las cúpulas empresariales y financieras, se recorta la sanidad, las pensiones, la educación... El que durante la primera fase de la Gran Recesión no haya habido apenas conflictos significativos entre actores claramente definidos y diferentemente perjudicados, y no se identificasen objetivos claros de combate común entre los contendientes, no significa que la tensión no existiese sino que la mayoría permanecía tumbada en la

lona intentando recuperarse, primero con estrés, luego muerta de miedo: ¿Cuándo me tocará a mí? Estamos viendo, sin embargo, cómo en una segunda fase de la crisis la contradicción principal se plantea entre aquellos grandes directivos financieros que a pesar de haber arruinado a sus sociedades –con riesgos enloquecidos, equivocaciones, abusos, información confidencial, incompatibilidades y delitos– y de que los bancos se hayan sostenido con el dinero y los avales de todos (porque la intervención estatal o regional consistió en regarlos de liquidez para que sobreviviesen) han seguido cobrando emolumentos espectaculares que han generado alarma social, y todos los demás ciudadanos: las empresas no financieras, las pequeñas y medianas empresas, los profesionales liberales que parecían mejor asegurados (arquitectos, ingenieros, médicos privados, cuadros superiores de las sociedades industriales...), los asalariados, el ejército de reserva cada vez mayor que se ha ido formando con los integrantes de las colas del paro y, en última instancia, los que salían de ellas por ser desempleados de larga duración, a los que no asiste un Estado del Bienestar de corta duración, y cuya supervivencia depende de la beneficencia pública y privada y de la red social familiar.

El terreno de juego era, para la sexta parte de la humanidad que lo conocía y que geográficamente anidaba en el Primer Mundo, la universalidad del Estado del Bienestar. Y para las cinco sextas partes restantes del planeta, el conjunto de ayudas aleatorias que, dependiendo de la riqueza de las naciones, se ponen en circulación con los escasos impuestos recaudados, salvados de la acción de las “termitas fiscales” (aquellos que estando obligados a pagar gravámenes no solo no lo hacen sino que a través de sistemas legales de exenciones y exacciones sacan más de lo que dan), de la corrupción existente, y de los restos del dinero público que no ha sido utilizado para salvar a los bancos, considerados el *sistema sanguíneo* del capitalismo, ya que activan

el crédito con el que funciona el sistema como una bicicleta que no puede parar.

Lo más esperpéntico de poner muletas al sistema financiero ha sido la desvergüenza con la que han actuado algunos de sus directivos, que se han concedido autoayudas multimillonarias, mientras el resto de los ciudadanos veía cómo se perdían a centenares de miles sus puestos de trabajo, se reducían sus sueldos, se congelaban o bajaban sus pensiones y se endurecían las condiciones para cobrarlas, etcétera. Lo más grave ha sido la distribución tan regresivamente desvergonzada de la tarta social, tan notable que a veces parece imposible de creer. Los que denunciaban esta situación eran calificados de resentidos y demagogos por los intelectuales orgánicos, que procuraban expulsarlos de las plataformas de estudio y de comunicación desde las que lanzaban la información sobre lo que estaba ocurriendo. El concepto de equidad no suele figurar en los análisis económicos dominantes, sino que se arrinconan. Para demostrarlo basta acudir a los libros de texto: aunque algunos mencionan el concepto de equidad y su contrario, la desigualdad, normalmente relegan estos términos al final de algún capítulo o incluso del libro. Es la cara oculta de la prosperidad. La equidad y la desigualdad del sistema se mencionan en aquellas partes que los estudiantes de ciencias económicas —los científicos sociales del futuro— saben que se pueden saltar cuando les toca estudiar para un examen. Hablar de equidad o de desigualdad con algunos economistas equivale a eructar en una cena de gala. Pero si se desea comprender el funcionamiento de la economía es preciso conocer su lado oscuro: la tendencia acelerada a caer en comportamientos antisociales.

Entre los analistas no hay consenso sobre el elemento central que determina el origen de la Gran Recesión. Sucedió lo mismo en la Gran Depresión. Unos opinan que ha sido la desregulación de los mercados financieros; otros escogen como prin-

cipal responsable a la política monetaria expansionista de Alan Greenspan al frente de la Fed y sus constantes bajadas de los tipos de interés, que incentivaron la toma de créditos y la búsqueda de riesgos elevados para obtener una mayor rentabilidad; hay quienes eligen el riesgo moral asociado a la creencia de que las grandes entidades bancarias serían siempre rescatadas en caso de dificultades (como así fue, excepto en el caso de Lehman Brothers). Incluso otros entienden que fue el resultado de las ideas equivocadas de muchos economistas que, bien porque estaban cegados por la ideología y no fueron capaces de ver la realidad, bien porque estaban a sueldo de los poderosos, o debido al contexto asfixiante en el que trabajaban, ya que en cuanto se salían de la norma se les consideraba heterodoxos y se les marginaba del núcleo de los departamentos universitarios, servicios de estudio, ciclos de conferencias, seminarios y empresas. Así nació el *pensamiento único*. Lo desarrolló John Manchester en un afilado ensayo, titulado muy expresivamente *¡Huy!*: la Gran Recesión fue el resultado del clima dominante que siguió a la victoria del mundo capitalista sobre el comunismo, tras la caída del Muro de Berlín; con el final de la Guerra Fría disminuyó de manera ostensible el capital político de las ideas de igualdad y justicia. Muchos bancos, exentos del miedo a un sistema alternativo, trataron la irresponsabilidad financiera como si fuera una materia prima, un recurso natural; el dinero barato fluía con rapidez, los ciudadanos recibían casi diariamente llamadas telefónicas no requeridas de entidades de crédito y cartas con impresos cumplimentados de solicitudes de préstamos. El libre mercado dejó de ser una manera de ordenar el mundo sometida a discusión para convertirse en un artículo de fe, en una creencia casi mística.

Por último, hay quienes sostienen que la crisis fue provocada por aquellos que, persiguiendo su exclusivo beneficio a corto plazo, hicieron de las finanzas un coto opaco sin re-

lación con la economía real. Entre los defensores de esta última teoría está Touraine, para el que el comportamiento de los muy ricos, dominado por la obsesión de ordeñar los beneficios máximos en el periodo más corto de tiempo, desempeñó y sigue desempeñando el papel principal en la disgregación del sistema social, es decir, “de toda posibilidad de intervención del Estado o de los asalariados en el funcionamiento de la economía”.

El sociólogo francés es muy crítico con el enriquecimiento personal de los altos directivos financieros (y de algunas empresas industriales y de servicios como los seguros): no existe nada en común entre los *golden boys* y el resto de los trabajadores, ya que mientras los primeros laboran para apropiarse de los beneficios, los demás piden subidas salariales de apenas el 1% o el 2%. Lo que caracterizaría a la sociedad presente es que las intervenciones masivas de los gobiernos permitieron la recuperación de las cuentas de resultados de los bancos, mientras que el elevado paro que se generó o el empobrecimiento de las economías familiares solo disminuirán mucho tiempo después del relanzamiento de la producción. Y si no existe esa capacidad de intervención de una autoridad política (elegida por los ciudadanos) que se esfuerce en oponerse a la dominación de los más ricos y en mantener cierta compatibilidad entre los intereses opuestos, ya no puede hablarse de democracia.

Robert Castel utiliza el concepto de *desafiliados* para denominar las abundantes categorías de excluidos o marginales que se están multiplicando entre nosotros. El desarraigo tiende a hacerse permanente entre numerosos ciudadanos, que dejan de serlo. La integración social deviene en una ensoñación para los que van quedándose por el camino de las crecientes dificultades o, como los jóvenes, que ni siquiera han podido iniciarlo y que no conocen lo que es un empleo decente y estable, sea cual sea su nivel de cualificación. Más allá del paro y

el empobrecimiento se extiende una suerte de *desocialización de la sociedad*, valga la redundancia, y un aumento de la exclusión. Ante este desolador panorama se activa la reinvención más clásica del concepto de el sentido que, a mitad del siglo XX, desarrolló el sociólogo Thomas H. Marshall, profesor de la London School of Economics. Este propuso una división de la ciudadanía en tres capítulos: civil, política y social. El elemento civil se compone de los derechos para la libertad individual: libertad de la persona, libertad de expresión, de pensamiento y de religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos, y derecho a la justicia. El elemento político es el derecho a participar en el ejercicio del poder como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros. El elemento social o económico abarca desde el derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar económico, al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad. Uno no puede ser ciudadano si no es triplemente ciudadano: civil, político y social o económico. Esta integridad del concepto de ciudadanía es la que se está haciendo trizas con la explosión del desarraigo y la extensión de las categorías de excluidos del bienestar. Hannah Arendt hablaba del “derecho del ciudadano a tener derechos”.

Durante algún tiempo lo peculiar fue la incapacidad de reacción de mucha gente, estática por su ansiedad y estupefacción; lo que Touraine ha denominado “el silencio de las víctimas”. Ninguna de las vanguardias intelectuales les había avanzado lo que iba a llegar y cómo les afectaría el desastre. Con algunas excepciones, se puede decir que hasta que no se extendió el movimiento de los *indignados* (Francia, España, Gran Bretaña, Israel, Chile, EEUU...), la parálisis fue la norma ante el gran saqueo en la distribución de la renta, la riqueza y las responsabilidades de la Gran Recesión. Llegó la *economía del mie-*

do, pero ello no suscitó una reacción masiva por parte de las víctimas, entre otros aspectos porque son muy heterogéneas y no conforman un grupo social definido. El silencio no se explica solo por el terror a perder el empleo, el sueldo y un lugar en la tarta de la distribución, sino también por el retroceso de las instituciones de defensa, los sindicatos de clase, y el debilitamiento —o la entrega— de los partidos políticos de izquierda que antes representaban naturalmente a los perdedores, incapaces de elaborar un relato alternativo al hegemónico. Los comunismos occidentales se disolvieron en la nada parlamentaria ante la caída del Muro de Berlín y lo que se conoció a continuación sobre la práctica política del socialismo real en los países del *telón de acero*. La socialdemocracia parece especializarse en ejercer de oposición y solo ha gobernado en países periféricos una generación después, sin que se disponga de la distancia histórica suficiente para concluir si esta es una tendencia definitiva o cortoplacista. La paradoja está en que mientras que en la primera fase de la Gran Recesión se aplicaron políticas keynesianas socialdemócratas para evitar que deviniese en Gran Depresión, al mismo tiempo desaparecían del poder la mayor parte de las formaciones que mejor representaban ese pensamiento y a las mayorías asalariadas. Luego llegó la reacción de la derecha, que se apoyó en los desequilibrios fiscales generados por aquellas inversiones públicas (practicadas también por ella), para intentar volver a la versión más ortodoxa de la política económica. La crisis no ha supuesto el reforzamiento de la izquierda política o sindical, sino todo lo contrario.

Instalados mucho más de lo deseado en este periodo de permanente austeridad y grandes dificultades económicas, los extremos se alejan cada vez más de la mediana en la tabla social: por la parte de arriba se desprenden unas pocas personas; por la de abajo se descuelgan muchas. Al tiempo que se multiplican los desafiados se hace realidad la *rebelión de las élites*

que hace un cuarto de siglo pronosticó Christopher Lasch. Frente a la orteguiana rebelión de las masas, Lasch desarrolló las circunstancias —que hoy lo son más que en ningún otro momento— en que grupos privilegiados de actores sociales y políticos, representantes de los sectores más aventajados de las sociedades, se liberan de la suerte de la mayoría y dan por concluido de modo unilateral el contrato social que los une como ciudadanos. Al aislarse en sus redes y enclaves de bienestar —en su mundo— esas élites abandonan al resto de las clases sociales a su albur, fragmentan el interior de las naciones y traicionan la idea de una democracia concebida por todos los ciudadanos.

La *rebelión de las élites* erosiona el capital social como argamasa que mantiene unida a la sociedad. Existe un acuerdo no escrito entre los ciudadanos, sus élites y su Estado, que se ha denominado contrato social. Este contrato exige la provisión de protecciones sociales y económicas básicas, incluyendo oportunidades razonables de empleo, y un cierto grado de seguridad por el hecho de ser ciudadano. Una parte de ese contrato social contemplaba una cierta equidad: que los pobres compartiesen las ganancias de la sociedad cuando la economía crece y que los ricos contribuyesen a paliar las penurias sociales en momentos de crisis. Esto es lo que se ha roto en la Gran Recesión. Las élites viven en un mundo de intereses particulares, ideología, conceptos abstractos y símbolos: la creación de valor, la evolución instantánea de los mercados, las tendencias financieras, la tecnología y la comunicación globales, la vida académica, el mercado como representación de la democracia... Viven en la representación de una comunicación planetaria, más coincidente con las élites de otros lugares que con las gentes corrientes con las que se cruzan a diario. La apertura de fronteras, su cosmopolitismo, las aleja de las clases medias y bajas, mucho menos favorecidas por la globalización y sujetas a la precariedad laboral y al progresivo

deterioro del Estado del Bienestar y de los servicios públicos. Según Lasch, la quiebra del pacto social conlleva una democracia individualista, basada no tanto en elementos solidarios como en el respaldo de los derechos personales, en un egocentrismo que define como “modelo narcisista de democracia”. Una tendencia que acentúa nuevas formas de desigualdad social y cultural, provocando una reducción de la calidad de la democracia.

Paul Krugman habla en sus artículos de la “imprudencia de las élites”, no de su rebelión. Lo hace para refrescar a sus lectores las responsabilidades de quienes indujeron al error y ahora pretenden atribuírselo a otros. Las políticas que nos metieron en este follón, dice literalmente, no eran respuestas a las exigencias ciudadanas; eran, salvo unas pocas excepciones, políticas abanderadas por pequeños grupos de personas influyentes y, en muchos casos, las mismas que ahora nos dan lecciones a los demás sobre la necesidad de ponernos serios y ser austeros. Al tratar de echar la culpa a la plebe, las élites eluden algunas reflexiones muy necesarias sobre sus propios errores catastróficos: “No deberíamos permitir que quienes defendieron políticas que destrozaron el presupuesto durante la época de Bush pretendan hacerse pasar por halcones del déficit, aquellos que elogiaron a Irlanda no deberían darnos sermones sobre el gobierno responsable”. La principal consecuencia es que al desviar la atención sobre los centros de gravedad de nuestras dificultades actuales, que sirven para absolver a quienes nos introdujeron en ellas, se elimina toda posibilidad de aprender de la crisis. La moraleja es que hay que responsabilizar a quien corresponde, para dar una lección a esas élites; de lo contrario, harán más daño en el futuro inmediato.

En un extremo tenemos a élites indiferentes a la suerte de la mayoría, y en el otro, multiplicándose, a los *desafilados*. Por motivos opuestos, ambos grupos ponen en cuestión el sistema y la teoría de unas clases me-

dias que se amplían constantemente por la evolución de aquel. Ello es lo que había acontecido hasta ahora, pero ya no ocurre así. El Estado del Bienestar, la mejor utopía factible de la humanidad, es prescindible para los primeros, que no quieren participar en su financiación porque no lo necesitan (tienen acceso a la asistencia privada), y expulsa a los últimos que, tras haberlo utilizado durante un periodo, quedan aislados del *welfare* al permanecer demasiado tiempo sin poder cotizar para el mismo (por ejemplo, los parados de larga duración que dejan de percibir el seguro de desempleo, las rentas mínimas o las pagas escoba; los pensionistas que después de haber cotizado muchos años a la Seguridad Social para su jubilación se quedan sin ingresos para continuar haciéndolo). Estas son las secuelas del largo plazo sobre las que todavía no se ha situado, de modo suficiente, el foco de atención.

Las tres décadas de hegemonía de la revolución conservadora han estado ocupadas en el debilitamiento del Estado del Bienestar. El discurso económico ha devenido en discurso político. No lo han conseguido del todo pues la defensa del *welfare* y su universalización sigue convocando a muchos ciudadanos a la resistencia. Pero los *neocons* y los neoliberales han logrado instalar en el razonamiento público la ideológica contradicción entre eficacia y solidaridad. Como si fuese la más significativa. Lanzada esta carga de profundidad de matriz económica pero de consecuencias políticas, a continuación han iniciado una ofensiva en el mundo de los valores. Primero, sobre la propia esencia del neoliberalismo, que campó a sus anchas en las décadas de los ochenta y noventa del anterior siglo, asimilando las entrañas del antiguo bloque soviético que, en un movimiento pendular, tendió hacia el otro extremo, y que es cuestionado por la Gran Recesión. Manfred B. Steger y Ravi K. Roy explican, en una breve introducción al neoliberalismo, que este hizo frente con sus propias reglas económicas a los países que conforma-

ban el Sur global, obligándoles, en tanto que países menos desarrollados, a adoptar sus condiciones; ofreciendo una imagen un tanto versátil llegó a atraer a los cuadros del Partido Comunista chino posterior a Mao, que abogaron por una reforma del “socialismo a la manera china”. Sin embargo, tras la primera década del siglo XXI “el neoliberalismo se nos aparece como un modelo desacreditado; se ha demostrado que el modelo económico global estaba construido sobre unos principios que se han visto sacudidos en lo más recóndito de sus entrañas por una catástrofe financiera desconocida hasta ahora desde los oscuros años de la década de 1930”. Y se preguntan: ¿Es que el neoliberalismo está condenado al fracaso o acaso puede recuperar de nuevo la gloria? ¿Verán nuestros ojos que los líderes reformistas del G-20 se embarquen con honestidad en una nueva empresa o intentarán aferrarse a los gloriosos días neoliberales de los *felices noventa*? ¿Existe alguna alternativa viable al neoliberalismo?

Intentada esta reinención del neoliberalismo hacia el neoconservadurismo más extremo (el ejemplo mayor es el movimiento del *Tea Party* en EEUU), los *neocons* han intentado barrer de la faz de la tierra todo lo que cotizaba en las bolsas de valores (no bursátiles) como *mayo del sesenta y ocho*. De este apenas se recuerdan los motivos concretos que provocaron las movilizaciones de los estudiantes (algo tan nimio como acabar con la prohibición de que en los colegios mayores de la Universidad de Nanterre no se pudiesen juntar los chicos y las chicas), pero sí una manera de entender la vida: abierta, progresista, laica, ecológica, feminista, transparente. Los *neocons* huyen del progresismo como antiguo y mal visto, arrojan el laicismo a las alcantarillas con operaciones conjuntas de los gobiernos y las iglesias, y las sectas religiosas, muchas de ellas absolutamente opacas, penetran en los aparatos del Estado (la Justicia, el Parlamento, el Ejército) y en los puestos más relevantes de la sociedad civil (la

juventud del Papa, las fundaciones, los centros de pensamiento) mientras se vuelve a hablar del Bien y del Mal como dialéctica de los conflictos. A los matices se les llama “relativismo”. Tras la dominación económica, la nueva derecha pretende la hegemonía civilizatoria. El ambiente que se propició desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 facilita la compulsión hacia la seguridad, concepto hasta hace poco más familiar a la derecha que a la izquierda. Se intenta boicotear y sacar de la agenda la ampliación de las libertades (se recurre el matrimonio entre homosexuales, se cuestiona la ampliación del aborto o la aceleración de los divorcios, se vuelve a la educación con distinción de sexos en los centros escolares...) y avanzan a fuerza de votos los *cirujanos de hierro*, sin necesidad de acudir a los toscos golpes de Estado de antaño. El garantismo del Estado de Derecho ha pasado de moda, y es secundario en los momentos excepcionales (como en la discusión sobre la tortura). Solo las minorías se interesan por los *vuelos de la CIA*, lo que ocurre en Guantánamo con los prisioneros talibanes o con los detenidos sospechosos de terrorismo. Cuando la antigua directora del Consejo de Seguridad de EEUU, Condoleezza Rice, se felicitaba por las buenas relaciones existentes entre su jefe, el presidente Bush, y el presidente español, José María Aznar, lo hacía en términos de autoridad: “Aznar y Bush tienen buena química; el presidente admira a los líderes fuertes y Aznar lo es”. La fortaleza como razón primera del liderazgo.

Mientras encontramos el vector dominante de estas tendencias, debemos convencernos de que nos tratan de llevar a lo que el intelectual reaccionario Paul Johnson denominó “el fin de la permisividad”. Los excesos del capitalismo financiero global que provocan la exclusión y la desconfianza, el desgajamiento de los más poderosos y de los *desafiliados* (una grandiosa sociedad dual por abajo y otra pequeña sociedad dual elitista por arriba), la emergencia como norma de los valores más conservadores y del autoritarismo son las ave-

nidas por las que parece circular el planeta en esta primera parte del siglo XXI. La globalización genera inseguridad y temor en una cantidad creciente de ciudadanos que observan cómo retroceden los derechos adquiridos como ciudadanos o cómo no llegarán nunca a los estándares de libertad y de bienestar de los que han disfrutado los más agraciados. Mientras los ciudadanos comunes se interrogan acerca de sus riesgos crecientes, las élites se sienten más o menos cómodas (aunque intrigadas por la aparición y la constancia de los *indignados*), instaladas en sus recetas y separadas de la suerte de los demás. Frente a la ideología de la globalización feliz está la lección de la historia: las naciones que pierden el control de sus economías se lanzan de cabeza hacia los populismos y los nacionalismos. Entiende Touraine que si hoy nos sometemos a los intereses de un capitalismo abusivo, sin cohesión y sin solidaridad, estaremos preparando un siglo XXI todavía más violento y militarista de lo que haya podido ser el siglo XX.

Si las extraordinarias ganancias de unos se asocian en la opinión pública a la pobreza de otros muchos, al menos habría que asegurar a estos últimos las condiciones de seguridad e independencia que les permitan actuar como ciudadanos, con el objeto de deducir en forma de impuestos una parte de los ingresos de los más ricos. Si no es así, la situación pasa a ser explosiva. No es posible sostenerse permanentemente en el grado máximo de la tensión de dos principios contradictorios: por un lado, el mercado regido por el principio del sufragio restringido, en el que la apropiación de los bienes es proporcional a los recursos de cada uno (un euro, un voto); por el otro, la democracia regida por el sufragio universal (un hombre, un voto). La democracia que transforma a los asalariados en ciudadanos es la condición primera para la recuperación económica.

Democracia y mercado

Hemos regresado como en un bucle, un siglo después, a la dialéctica entre democracia y mercado. Sabemos que

puede haber capitalismo sin democracia (la España de Franco, el Chile de Pinochet, la China post Mao), pero no al revés. Lo ha teorizado Amartya Sen y lo corrobora la historia: para que funcione ese nudo gordiano de nuestras sociedades, ambos términos deben mantenerse en un cierto equilibrio. En sus virtudes y en sus defectos. Crecientemente hay una descompensación notable: la democracia avanza a sorbos pero pierde en calidad y participación pública mientras el capitalismo es el único sistema socioeconómico realmente existente, y va acompañado de ausencia de frenos, abusos, escándalos y complicidades espurias con el poder político. Vivimos en un mundo deforme, cuyo cuerpo tiene un brazo derecho, el económico, mucho más vigoroso que el izquierdo, el político. Hace casi setenta años, en 1942, el economista austriaco Joseph A. Schumpeter —uno de los más influyentes del siglo XX, junto a John Maynard Keynes— publicó un libro capital para la economía y la sociología: *Capitalismo, socialismo y democracia*. Cuando apareció en Londres, el *New English Weekly* predijo que durante los diez años siguientes sería una obra que nadie que deseara tener un mínimo grado de información sobre economía y sociología política podría permitirse el lujo de no leer. Se quedó corto: muchas décadas después de hacerse pública, sus contenidos se siguen discutiendo, y la emergencia de la Gran Recesión le ha dado otra oportunidad. En ese texto se hace un homenaje al padre del socialismo científico, Karl Marx, y un bosquejo histórico de los partidos socialistas, pero su esencia está en tres capítulos que incorporan las reflexiones sobre si podrá sobrevivir el capitalismo, si puede funcionar el socialismo y cómo pueden ser las relaciones entre el capitalismo y la democracia.

La supervivencia del capitalismo adquirió características de novedad en las peores fases de la Gran Recesión, cuando todo parecía posible (en el otoño del año 2008, momento en que quiebra Lehman Brothers, el Go-

bierno americano ha de intervenir bancos, agencias hipotecarias y grandes aseguradoras, y las principales economías ven hundirse su Producto Interior Bruto. A esos meses se los denominó “el trimestre del diablo”). La primera frase trascendental de Schumpeter es tajante sobre el asunto: “¿Puede sobrevivir el capitalismo? No; no creo que pueda”. Pero al contrario que Marx, que profetizó su desaparición forzado por sus contradicciones internas, Schumpeter considera ineludible la descomposición del sistema capitalista y el surgimiento de un socialismo (que no le gusta), debido a su propio éxito: el dinamismo del capitalismo se manifiesta a través de un proceso de destrucción creadora mediante el cual los elementos anticuados son constantemente destruidos y reemplazados por otros más modernos. Las realizaciones presentes y futuras del sistema capitalista son de tal naturaleza que rechazan la idea de su derrumbamiento bajo el peso de la quiebra económica, pero el éxito de aquel mina las instituciones sociales que lo protegen y crea “inevitablemente” las condiciones en las que no le será posible sobrevivir y que señalan claramente al socialismo como su heredero legítimo. Su conclusión final no difiere de aquella a la que llegan la mayoría de los escritores socialistas (de su tiempo) y en particular todos los marxistas. Sin embargo, Schumpeter advierte que esta profecía no implica nada acerca de la deseabilidad del curso de los acontecimientos que se vaticinan: si un médico predice que su paciente morirá en breve, ello no quiere decir que lo desee. Se puede odiar al socialismo (como le ocurre a nuestro economista), o por lo menos mirarlo con una fría crítica y, no obstante, prever su advenimiento. Y al revés: “Tampoco se necesita aceptar esta conclusión para calificarse de socialista. Se necesita querer al socialismo, creer ardientemente en su superioridad económica, cultural y ética y, no obstante, creer al mismo tiempo que la sociedad capitalista no alberga ninguna tendencia hacia su

destrucción. Hay, efectivamente, socialistas que creen que el orden capitalista recupera la fuerza y se estabiliza a medida que transcurre el tiempo, por lo que es una quimera esperar su derrumbamiento”.

En realidad, es lo que ha sucedido. Con motivo del cincuenta aniversario de la aparición de *Capitalismo, socialismo y democracia* se celebraron diversos seminarios acerca de la actualidad de sus contenidos. En uno de ellos, Francis Fukuyama, famoso por haber desarrollado las tesis de Alexander Kojève acerca del “fin de la historia”, defendía que desde la segunda mitad del siglo XX se ha asistido a una inversión notable de los vaticinios de Schumpeter: el capitalismo no ha conducido inevitablemente al socialismo sino que, por el contrario, este último ha cedido el paso de modo inexorable al capitalismo. A continuación, Fukuyama arrimaba el ascua a su sardina para analizar cómo el capitalismo y la democracia —que Schumpeter consideraba decididamente reñidos entre sí— encontraron la manera de coexistir y de reforzarse de manera mutua. Las razones de esta reversión capital de las expectativas de Schumpeter estriban en dos procesos evolutivos que sería imprescindible actualizar casi dos décadas después: por una parte, la naturaleza cambiante del proceso de industrialización impulsado por el desarrollo científico contemporáneo; por la otra, el progresivo consenso en torno a la legitimidad de la democracia liberal en el ámbito autónomo de la política.

Desde que se asienta la globalización, tras la caída del Muro de Berlín y la autodestrucción del socialismo real, se han confrontado dos tesis antagónicas: la mayoritaria, que plantea la complementariedad entre mercado y democracia, que se reforzarían mutuamente, y otra, hasta ahora minoritaria, que opina que la extensión de la esfera del mercado conlleva una limitación de la democracia. La primera ha sido dominante hasta antes de ayer, pero el aumento de las dificultades económicas, el he-

cho de que en ningún otro momento de la historia, con la excepción de los años de la Gran Depresión, hayan sido tan grandes las disfunciones de la economía en términos de desempleo, exclusión, desigualdad, extensión de la pobreza en el seno de las sociedades ricas, dificultades en la lucha contra el cambio climático, etcétera, no pueden dejar indiferentes a los demócratas.

Este dúo, democracia y mercado, ha entrado en dificultades mayores con la Gran Recesión. La economía y la sociedad se confrontan en una tensión entre dos principios, el individualismo y la desigualdad por una parte, y el espacio público y la tendencia a la igualdad, por otra, lo que obliga a la búsqueda permanente de un compromiso entre ellos. Aunque la jerarquía de valores exija —excepto para los fundamentalistas del mercado— que en última instancia el principio económico esté subordinado a la democracia, y no al revés. Esto es lo que se ha desequilibrado en los últimos tiempos, y lo que explica que se haya producido un retroceso “pacífico” de la democracia a favor del mercado, en palabras del economista francés Jean-Paul Fitoussi, uno de los que más han estudiado la dialéctica contemporánea entre ambos conceptos. La democracia, al impedir la exclusión de los ciudadanos por parte del mercado, aumentaba la legitimidad del sistema económico mientras que el mercado, al paliar la influencia de lo político sobre la vida de la gente, permitía una mayor adhesión a la democracia. Cada uno de los principios que regía las esferas política y económica encontraba su limitación natural en el otro.

¿Desde cuándo ello no es así? Cualquier ciudadano convendrá en que, en ocasiones, ya no son la política y el derecho quienes gobiernan la sociedad, sino los mercados. La gente expresa mayoritariamente ese sentimiento en las encuestas de opinión. Las sensaciones de incertidumbre y de inseguridad prevalecen; la autonomía de la economía y las coerciones que la misma impone a las decisiones

políticas reducen el campo de la seguridad colectiva que representa la democracia. Se habla de la “impotencia de la política”, ya que los cambios en el Estado del Bienestar, en los sistemas de protección, en las políticas sociales (hubo un tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta principios de la década de los ochenta del siglo pasado, en que no eran un simple apéndice de la política económica sino consustanciales a la democracia social de mercado en que se convivía) no proceden de las decisiones tomadas por los representantes del pueblo (en cuyo caso corresponderían al deseo de la ciudadanía) sino de la coerción exógena que se impone a la democracia. La legitimidad de esa coerción se justificaría en la eficacia de las políticas tomadas, pero ello conduce a invertir esa jerarquía normal de los valores: ahora, lo primero es la eficiencia y después, solo a título testimonial, la democracia. Atendiendo a los resultados es difícil convenir que las políticas económicas hegemónicas en los últimos 30 años hayan sido lo suficientemente eficientes en relación con los fines que pretendían. Entre los ciudadanos subsiste, en el mejor de los casos, un estado de ánimo de inequidad: a mi país quizá no le ha ido mal, pero a mí sí, o en todo caso no tan bien como hubiera querido o merecido. El ensanchamiento de las clases medias, espectacular en ese periodo, no se ha visto acompañado de una adecuación de las instituciones propias de las democracias representativas, incluyentes. Los beneficios de la prosperidad se han repartido desigualmente.

La ideología ha penetrado como un tifón en el discurso económico y debatir el lugar de lo público es un contradiós. El mercado es demasiado serio para dejarlo en manos de la política. La búsqueda de la justicia social es un obstáculo para la eficacia económica. Innumerables veces aparece en el discurso político la cuestión de si se puede mantener el *welfare*, mucho o poco, sin que el mercado se resienta de ello o lo ataque con fiereza (como ha sucedido en Europa con

la crisis de la deuda soberana). Una política tan conservadora como Angela Merkel interviene ante el Bundestag en mayo del 2010 y sentencia: estamos librando “la batalla de los políticos ante los mercados”. Habíamos convenido que la política intervenía para regular el sistema capitalista, para atenuar sus consecuencias menos aceptables, para volverlo compatible con las visiones de justicia que prevalecen en la sociedad. Esto es lo que ha sufrido una contorsión ideológica. Después de la Segunda Guerra Mundial parecía que habíamos aprendido con sangre de nuestros errores inmediatos y que las políticas económicas se formulaban en términos de objetivos últimos: el pleno empleo, el aumento del nivel de vida de la mayoría, conseguir una protección desde la cuna hasta la tumba solo por el hecho de ser ciudadano, etcétera. Desde que la revolución conservadora se hace hegemónica, esas mismas políticas se manifiestan como objetivos intermedios: domar la inflación, equilibrio presupuestario, privatizaciones, flexibilidad de los mercados, desregulación, conceptos muy difíciles para encandilar a la gente. Por ello casi nadie se presenta a las elecciones con el cartel de neoliberal o neoconservador, sino con el de centro derecha. La búsqueda de la estabilidad de precios o la del equilibrio presupuestario (en sociedades con muchas necesidades que cubrir) son las únicas políticas aptas para tranquilizar a los mercados, aunque crispen a los ciudadanos. Esta elección es, de hecho, una coerción para los gobiernos de uno u otro signo. No hay alternativa, no hay posibilidad de mantener un debate colectivo sobre cómo repartir el pastel, compartir la austeridad y decidir qué normas deben regir los bienes privados y cuáles los públicos. Hay un debilitamiento de la democracia como instancia de regulación del desarrollo económico y social. Un “estado de excepción económico”, en palabras de Ulrich Beck. La política, incomprensible, sorda, manejada por los dictados económicos, incapaz de

erradicar el cinismo y la corrupción, convertida en aparato de poder, sin ideología, pierde a borbotones reconocimiento social. La inseguridad económica conlleva la reducción de la adhesión de la población a la democracia. Por lo tanto, se rompe el pacto que vinculaba el régimen político y el régimen económico.

El profesor de Sociología, Ignacio Sánchez Cuenca, que ha trabajado sobre las relaciones entre la democracia y el liberalismo y llegado a la conclusión de que en el binomio “democracia liberal” lo liberal ha llegado a pesar demasiado y la democracia demasiado poco, escribe en un muy sugerente artículo (titulado gráficamente “¿Habrá siempre democracia?”) que las democracias liberales se construyen sobre dos principios complementarios: el principio de la igualdad política, en virtud del cual todos los ciudadanos, con independencia de su género, edad, etnia, riqueza, educación, etcétera, tienen el mismo derecho a participar en la vida política y nadie puede ser discriminado por ninguno de los motivos mencionados; y el principio de autogobierno, que establece que las decisiones colectivas han de tomarse en función de las preferencias de los ciudadanos, y no en función del criterio de los sabios, los aristócratas, la divinidad o los poderosos. Teniendo en cuenta que los ciudadanos, casi siempre, se encuentran divididos y tienen ideas distintas sobre lo que debe de hacerse, se recurre a la regla de la mayoría que es la regla que minimiza el número de gente que está en desacuerdo con la decisión adoptada. La cuestión es que, haya mayor o menor división en el seno de la sociedad, la decisión colectiva final se tome de acuerdo con lo que la gente piensa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que se va abandonando paulatinamente el principio de autogobierno. Mientras que los derechos que garantizan la igualdad política se mantienen estables y tienen una solidez envidiable, las decisiones de los responsables políticos cada vez guardan una conexión más lejana con las preferen-

cias individuales de los ciudadanos. Esto no se debe necesariamente a que los políticos traicionen a sus electores sino que más bien es consecuencia de la cantidad asfixiante de restricciones a las que está sujeto el poder representativo. Son tantas las limitaciones legales y materiales de los gobiernos, dice Sánchez Cuenca, que estos cada vez tienen menor capacidad para gobernar y llevar a cabo las promesas electorales por las que fueron elegidos. Así, los gobiernos han de actuar dentro de los estrechos márgenes que les dejan los tribunales constitucionales, los bancos centrales independientes, las agencias regulatorias y las instituciones supranacionales a las que deben obediencia. Y han de responder, además, a las presiones materiales de los mercados y los poderes económicos.

La Gran Recesión ha señalado, de modo muy crudo y sin matices, esa tendencia inquietante que han expresado las asambleas de *indignados* en muchas partes del mundo, constituidas en su mayoría por ciudadanos jóvenes: una desconfianza creciente hacia el poder representativo, en beneficio de instituciones y centros de poder sin legitimación democrática. El principio de que las decisiones colectivas son fruto de las preferencias ciudadanas está en franca retirada. Ya no se utiliza el argumento de si tal o cual decisión, tal o cual reforma son susceptibles de reforzar la democracia o, por el contrario, la debilitan; si aumentan o reducen la adhesión de la población al régimen político. El peso de los expertos y de instancias de poder no representativas, y la desconfianza ante los políticos, ponen en serios aprietos el ideal de autogobierno.

Sánchez Cuenca imagina un futuro en el que la democracia haya evolucionado hacia un sistema caracterizado por el respeto a los derechos fundamentales de las personas y por el mantenimiento de ámbitos de libertad importantes. Pero en ese mundo por vivir, la libertad de cada uno no podrá apenas utilizarse para definir proyectos colectivos que se lleven a la práctica. Seguirá habiendo liber-

tad de opinión, más incluso que antes, si cabe, pero sin la posibilidad de que las opiniones de la gente sean el criterio a seguir en la toma de decisiones políticas: “El futuro que nos aguarda no creo que pase por gobiernos despóticos o autoritarios. Sí, en cambio, por formas de dominación difusas y tecnocráticas, compatibles con el ejercicio de la libertad individual. Será el triunfo del liberalismo, que siempre ha mantenido una relación incómoda y tensa con el principio democrático”.

Fitoussi, que ha estudiado a fondo esta inversión de valores, ha hecho pública una alegoría en la que los ganadores de la globalización y de la Gran Recesión dicen a los perdedores: “Lamentamos sinceramente el destino que habéis tenido, pero las leyes de la economía son despiadadas y es preciso que os adaptéis a ellas reduciendo las protecciones que aún tenéis. Si os queréis enriquecer debéis aceptar previamente una mayor precariedad. Este es el contrato social del futuro, el que os hará encontrar el camino del dinamismo”. Los ganadores, que son conscientes de que los datos del destino han caído a favor suyo, ya no quieren participar en el sistema de protección social ni, en general, en la financiación de los gastos públicos. Lo que nuestro periodo, como antaño la *belle époque*, ofrece como espectáculo es el baile de los perdedores y de los ganadores, donde a veces la ganancia es tan grande que se vuelve casi imaginaria, más del orden del concepto que de la realidad. ¿Cómo entender que la fortuna de un puñado de privilegiados sobrepase la renta de países poblados por cientos de millones de habitantes? No existe una posible representación concreta del infinito.

Esta ruptura del anterior contrato social es lo que ha hecho escribir a alguien tan poco sospechoso como Simon Johnson, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los años del arranque de la Gran Recesión (2007 y 2008), que se ha producido un “golpe de Estado silencioso”, lo que explica en parte

esa desafección ciudadana respecto al *establishment*, y también los movimientos de resistencia habidos. Si se manejase hegemónicamente el concepto de eficacia democrática, el éxito de las intervenciones políticas en el mundo de la economía se debería medir por la recuperación del empleo y la contención de la inseguridad y el miedo, y no solo por la vuelta de los beneficios de la banca, mientras se analiza que, inevitablemente, el elevado paro estructural solo disminuirá mucho tiempo después del relanzamiento de la economía. Si no existe capacidad de intervención por parte de una autoridad política que se esfuerce en oponerse a la dominación de los mercados y los más ricos en mantener cierta compatibilidad entre intereses opulentos puede hablarse de democracia. O como dice Amartya Sen, la democracia, más allá de la representación política y del respeto a la regla de la mayoría, implica la protección de los derechos y libertades de los individuos, el acceso a las prestaciones sociales y el derecho a acceder a la información y participar activamente en la deliberación pública. La cuestión es por qué este tipo de capitalismo está manteniendo a la democracia. ■

[Extracto del capítulo I de *La economía del miedo*. De próxima publicación en Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores.]

Joaquín Estefanía es economista y periodista. Autor de *La mano invisible. El gobierno del mundo*.